

A 90 millas

LOS CUBANOS NOS PRECIAMOS DE NUESTRA «MODERNIDAD». La geografía y el azúcar nos apuntaron en esa dirección: La isla entre mundos hizo de La Habana parada obligada a lo largo de los siglos, y la caña —el «oro blanco» de antaño— generó riquezas incontables, si bien sobre las espaldas de cientos de miles de africanos. A la sombra de la capital y de los cañaverales surgió nuestra peculiar conciencia de distinción y destino. No siempre, sin embargo, calibramos debidamente el peso que el haber emergido entre imperios y extramuros tuvo en la configuración de esta peculiaridad nuestra. La nación adquirió sus características y preocupaciones fundacionales durante el siglo XIX bajo la mirilla de España, Inglaterra y los Estados Unidos. Anticipadamente aprendimos los cubanos una lección que sólo impartiría el siglo XX: a las naciones pequeñas no les queda otro remedio que andar los pasillos de las grandes capitales a fin de defender, definir y avanzar sus intereses. Cuba se conformó en Madrid, Washington y Nueva York poco menos que en La Habana, Santiago y Camagüey. Los cubanos movilizaron opinión y recursos extramuros en favor del anexionismo, el autonomismo y la independencia. Hacia fines del siglo XIX ya había una diáspora representativa de amplias gamas de la sociedad cubana y ascendiente a unas 100,000 personas. Un 10 por ciento de la población de entonces residía fuera de Cuba y lo hacía fundamentalmente en los Estados Unidos.

La situación de hoy presenta paralelos evidentes con la de hace un siglo. Cerca del 15 por ciento del total e indeliblemente timbrada por el sello norteamericano si bien dispersa a lo largo del planeta, la diáspora actual es un componente esencial de la nación. Lo es no sólo por la actuación y los sentimientos de la mayoría de sus miembros, sino además porque la consabida globalización económica y las grandes migraciones le han ido dando otros giros a las fronteras nacionales. Repito: Los cubanos, de cierta manera, nos anticipamos a estas realidades, pero con un gran escollo. Si bien concientes de que el mundo de fines del siglo XIX era muy distinto al de 75 años antes

cuando la América Latina cobró su independencia, los independentistas cubanos se regían, comprensiblemente, por conceptos decimonónicos de la soberanía. Nuestro nacionalismo, por tanto, nació desfasado, o al menos así parece un siglo después, y en el decursar del XX no hemos sabido o podido componer un sentido de nación más acorde con las realidades internacionales y el bienestar de los cubanos. México, Colombia y la República Dominicana, por ejemplo, ya contemplan los derechos ciudadanos de millones de mexicanos, colombianos y dominicanos en los Estados Unidos. Más manifiesta es la red de inversiones, comercio y remesas que entrelazan las comunidades norteñas con las economías de la cuenca caribeña. Esta década próxima a concluir nos despunta un futuro similar para Cuba. Las remesas ya son la primera fuente de ingreso en divisas de la economía cubana; las perspectivas intrínsecas a la normalidad son amplias y de beneficio mutuo. Más difícil de anticipar son las relaciones políticas entre la diáspora y la isla una vez pasado este presente. Ni la visión de «nación y emigración» que impera en la Cuba oficial ni la tajante separación que intentan mantener los sectores más recalcitrantes del exilio son compatibles con una reintegración en el nuevo siglo.

Después de 1959, La Habana, Washington y Miami abrieron una trocha entre Cuba y los Estados Unidos y entre el exilio y la isla más fortificada que la de los españoles entre Oriente y Occidente en la Guerra del 68. Así y todo, durante la década del 90, la nueva ola de cubanos llegados a la diáspora, las visitas familiares, los intercambios culturales, los acercamientos profesionales y las remesas han ido debilitando esa trocha. El discurso político, no obstante, sigue mayormente fijado en el pasado. Cuba cuenta con 15 provincias, no catorce, la última siendo la diáspora dispersa —en los Estados Unidos y a lo largo del planeta— y su capital, claro, Miami: No somos polos opuestos, sino complementos. Pero a ambas orillas de las 90 millas, nuestras prácticas políticas no nos están preparando para esa necesaria e ineludible convivencia. La política de Washington —aunque es justo reconocer que la administración Clinton ha intentado abrir y flexibilizar sus relaciones con La Habana en la medida en que la desacertada ley Helms-Burton lo permite— tampoco nos está ayudando a integrar esa Cuba de 15 provincias. Vivimos, ¿qué duda cabe?, una situación anormal.

La normalidad forzosamente nos obligará a relacionarnos con los Estados Unidos de forma diferente. Cuba y los Estados Unidos se han caracterizado por sus relaciones exaltadas: en el siglo XIX por el estatus político de la isla, a principios del XX por la Enmienda Platt, luego por la revolución del 33, después por la dictadura de Fulgencio Batista y, claro, a partir del 59 por la revolución y el notorio embargo. Normales fueron los doce años de la Constitución de 1940 cuando el Batista civil y los auténticos Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás iniciaron una redefinición de las relaciones ya sin la intromisión de la desatinada enmienda, pero que, desafortunadamente, el Batista militar interrumpió con el marzato de 1952. Ninguna de las partes oficiales, por tanto, tiene demasiada experiencia con la normalidad.

La diáspora tampoco. Los momentos de exaltación extrema, como los dos fines de siglo, sobredimensionan el papel de los cubanos en los Estados Unidos, y ésa es la reflexión que me propongo. No se trata de equiparar las dos diásporas punto por punto, sí de apuntar los trasfondos políticos, la forma en que se resolvieron a fines del XIX y el estancamiento que actualmente vivimos.

LOS CUBANOS EN ESTADOS UNIDOS EN EL SIGLO XIX

La problemática del XIX cubano se centró sobre el estatus político. A lo largo del siglo, los autonomistas fueron los grandes, si bien frustrados, reformistas de la condición colonial; registraron a los Estados Unidos en un segundo plano. Ya para 1895 no pocos autonomistas habían descartado la viabilidad de las reformas y se unieron al esfuerzo independentista, aunque con voz y mirada distintas a las de los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso. En contraste, el separatismo en sus dos variantes —el anexionismo y el independentismo— se fijó en los Estados Unidos; la ruptura con España era imprescindible. Los separatistas pesaron más en la significación de nuestra personalidad política que los autonomistas: por el hecho de contemplar a Cuba en relación con la nación decisiva y por el legado de sus estrategias y acciones.

El anexionismo —cálculo y no sentimiento, según afirmara Gaspar Betancourt Cisneros en la famosa polémica con José Antonio Saco— abrigaba dos corrientes: una que abogaba por una negociación que le permitiera a los Estados Unidos comprarle la isla a España y otra que propiciaba una invasión como primer paso hacia la incorporación a la unión norteamericana. Los anexionistas representaban las opiniones más encontradas referentes a los temas candentes del momento: la esclavitud, la trata y la democracia. Unos buscaban la anexión por puros intereses económicos y por temor, sobre todo, a repetir en Cuba la experiencia haitiana; otros se horrorizaban con la penosa experiencia de las jóvenes repúblicas latinoamericanas y preferían añadir a Cuba a las estrellas de una unión democrática que el riesgo de convertirla en una república más corroída por caudillos y conflictos civiles.

Por razones tanto ajenas como propias a Cuba, la anexión no se dio. Por una parte, España no quiso vender a Cuba, y los Estados Unidos no estuvieron dispuestos a provocar una guerra con España y/o con Gran Bretaña a fin de obtenerla. Por otra, la situación interna no favoreció la anexión por vías de la violencia; Narciso López y sus allegados no encontraron contrapartida en la isla. No obstante, el anexionismo nos dejó un legado importante. Sus proponentes actuaron desde los Estados Unidos e incluso, a veces, a contrapelo de Washington. El fracaso llevó a los sectores más radicales a valorar tanto la autodeterminación como el uso de las armas; no pocos se sumarían al independentismo. Su preocupación por la convivencia democrática en una Cuba no española era genuina; los lopiztas procuraban primero una invasión separatista y luego la determinación democrática del estatus que ellos confiaban resultaría en la anexión. Por otra parte, los anexionistas moderados movieron sus piezas en torno a las negociaciones entre España y Estados Unidos, convencidos de

que había que evitar la guerra a toda costa por temor a sus consecuencias sociales, es decir, a la rebelión de los esclavos.

En 1860, al estallar la guerra civil en Estados Unidos, los sectores norteamericanos que habían apadrinado la anexión de Cuba ya estaban perdiendo vigencia. Después de 1865, la cuestión cubana fue adquiriendo otros matices pues se trataba más bien de mantener la estabilidad política en la isla que de impulsar una fórmula política determinada. La anexión no dejaba de encontrar cubanos adeptos: Carlos Manuel de Céspedes, después de todo, la pidió desde la manigua. Más tarde, el sector newyorkino del Partido Revolucionario Cubano no descalificaba del todo una posible anexión. El anexionismo es precursor del independentismo de los 90, no, claro está, en sus fines, sino por sus debates, sus métodos y su relación con Cuba extramuros.

La década del 90 pasada destaca dos logros políticos notables de los cubanos en Estados Unidos. El primero fue el Partido Revolucionario Cubano. El gran mérito de José Martí fue el confederar las corrientes de la diáspora —militar, civil, obrera, pequeñoburguesa— en lo que probablemente fuera el primer movimiento de liberación nacional del siglo XX. El genio y la figura de Martí en sí no explican este logro singular. Una amalgama de condiciones lo hizo posible: la intransigencia política de Madrid (o su tardía transigencia); la recesión económica provocada por la revocación desde Washington de la reciprocidad arancelaria; la incompetencia española para proteger los intereses azucareros; la capacidad movilizadora de recursos humanos, materiales y de opinión del PRC; y, sobre todo, la ascendencia de la independencia en la sociedad cubana como la única alternativa viable al integrismo español. Esta confluencia —bien interpretada por Martí y la dirigencia del PRC— produjo un consenso acerca de la necesidad de retomar las armas en el camino hacia la independencia. Así pues, civiles y militares, obreros y pequeñoburgueses, en la diáspora y en la isla, ex autonomistas y ex anexionistas, blancos, negros y mulatos se confederaron para darle inicio a la Guerra de Independencia el 24 de febrero de 1895.

El otro logro notable de los cubanos en Estados Unidos durante los 90 pasados fue el *lobby* dirigido por el PRC de Estrada Palma en Washington, Nueva York y ante la opinión pública norteamericana. Su objetivo era lograr que la administración de William McKinley admitiera oficialmente la beligerancia en Cuba, apoyara al Ejército Libertador y, de ser necesario, interviniera militarmente en la contienda. Martí y los militares en el PRC buscaban desatar una guerra rápida que le presentara al mundo el *fait accompli* de una Cuba libre, impidiendo así una intervención de Estados Unidos que coartara la independencia. Aunque por razones diferentes, los sectores civiles del PRC coincidían en la necesidad de un conflicto breve: se minimizarían las pérdidas materiales, la influencia de los caudillos y el peligro que una guerra prolongada realzaría a los sectores populares. Al morir Martí y al prolongarse la guerra, Estrada Palma y el PRC newyorkino impulsaron el *lobby* en favor de la beligerancia y la posible intervención. Hacia fines de 1897 la guerra estaba estanca: los mambises controlaban los campos, España las zonas urbanas. Se habían asumido pérdidas terribles: la guerra en sí, la reconcentración, el hambre, las

enfermedades y la tea habían cobrado un costo no anticipado en 1895. Próximo al 98, Máximo Gómez y el Ejército Libertador también subscribían la intromisión norteamericana para acelerar el tiro de gracia al colonialismo español; los autonomistas, es preciso recordar, fueron los únicos que hicieron sonar la alarma contra la ingerencia de Washington. Lo que compete resaltar en este ensayo, sin embargo, es el esfuerzo del PRC ante los políticos, la prensa y la opinión pública en Estados Unidos que casi seguramente también representa un pronto al siglo XX. ¿Hubo algún otro país latinoamericano que en tan temprana fecha moviera tan hábilmente tantas fichas en el tablero norteamericano?

Aunque me tienta, no voy a detenerme sobre el desenlace del 98. La intervención se dio, aunque Washington nunca reconociera el estado de beligerancia; las tropas norteamericanas, además, trataron más respetuosamente al derrotado ejército español que a los mambises. La república se fundó finalmente, si bien no fue la que soñaron Martí y los tabaqueros ni tampoco la que habían anticipado Ignacio Agramonte en el 68 y los sectores civilistas en el 95: la Enmienda Platt matizó la soberanía, la expansión azucarera soslayó los ideales populistas y los caudillos militares se apropiaron de la política y del erario público. No, lo que viene al caso no es la república, sino la confluencia que la hizo posible y el papel que los cubanos en Estados Unidos jugaron en su favor en la década del 90. El PRC y el lobby fueron logros políticos extramuros que contribuyeron decisivamente a desatascar viejas polémicas, a movilizar múltiples recursos y a desbrozar el camino hacia la independencia.

LOS CUBANOS EN ESTADOS UNIDOS EN VÍSPERAS DEL NUEVO MILENIO

Este fin de siglo Cuba y la diáspora se encuentran polarizadas y estancadas. Llegamos al año 2000 habiendo trillado y retrillado los mismos caminos y faltándonos imaginación, voluntad y valentía para despejar nuevos horizontes. Para sobreponernos a este presente tendríamos que ejercer nuestra vanagloriada modernidad en el terreno donde casi siempre hemos fallado: la política. Pudiera parecer extraña esta afirmación ya que durante la última década los cubanos a ambos lado del estrecho de la Florida obtuvimos resultados políticos notables.

Las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) colmaron con creces los esfuerzos persistentes de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). Concebida a fines de los 70 cuando la administración Carter abría un diálogo con La Habana, la fundación se propuso torpedear el *rapprochement* en ciernes. La coyuntura nacional estadounidense favoreció a la FNCA: un Carter reelecto casi seguramente no le hubiera dado la misma acogida a los postulados del exilio intransigente. La elección de Reagan truncó la incipiente expectativa bipartidista de que las relaciones entre Washington y La Habana se encaminarían hacia la normalización, y la distensión cubano-norteamericana se apagó. A lo largo de los 80, Jorge Más Canosa y la FNCA supieron sacarle el máximo provecho a la renovada guerra fría del primer mandato de Reagan y la especial atención que Washington le otorgó a Centroamérica y el Caribe. La caída del muro de Berlín despertó una nueva expectativa en Washington que complementaba a la FNCA: por fin Castro caería y ¿por qué no acelerar el

final de la partida mediante la fortificación del embargo? En octubre de 1992, el presidente George Bush firmaba la ley Torricelli. No hay que ser partidario de esta ley —como no lo soy— para reconocer la lógica esbozada por sus patrocinadores: la desaparición de la Unión Soviética dejaba al gobierno a la intemperie y sin defensa ante el embargo y, por tanto, ahora sí se tasaría su efectividad como elemento de presión.

A mediados de los 90 ya era evidente que el gobierno cubano había logrado su objetivo principal: mantenerse en el poder. Lo que la Cuba oficial tilda de «doble bloqueo» —el embargo de Estados Unidos y las consecuencias de la desaparición de la Unión Soviética— se había vencido. La dirigencia cubana aguarda el nuevo milenio satisfecha de haber desafiado todos los pronósticos. Cierto es que la economía cubana dista mucho de recuperar incluso los ya deprimidos niveles de 1989. Cierto también es que los cubanos viven oprimidos por el temor, la apatía y la impotencia política. Pero, a las élites en La Habana no les interesa realmente reestructurar la economía, ni aliviar las oprimidas condiciones de vida de la ciudadanía, ni mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Navegaron los mares tormentosos de la post-guerra fría sin hacer concesiones irreparables: no convocaron elecciones libres; no permitieron una apertura tipo *glasnost* que le soplara aire fresco a la cúpula y a la sociedad; impidieron el brote de manifestaciones masivas que requirieran una respuesta tipo plaza Tiananmen; implementaron una reforma económica que tiene poco que ver con la difunta *perestroika* o con la reestructuración china o vietnamita; resistieron a Washington y a Miami, reforzando así el factor nacionalista frente a Goliat y la cuota de miedo ante el exilio revanchista. En el ámbito internacional, el embargo reforzado hizo de Europa, Canadá y América Latina aliados tácticos de la Cuba oficial frente a Washington. A lo largo de la década, la diplomacia cubana se abrió espacios inimaginables en 1990. Si bien la Cuba de Fidel Castro ya no ejerce el encanto del pasado, tampoco es repudiada mundialmente como lo fueron el Chile del general Pinochet o la Sud África del apartheid.

Miami y La Habana, pues, registraron logros políticos relevantes en la última década. Se dieron la mano con la promulgación de la ley Helms-Burton en marzo de 1996. Indudablemente, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate forzó la firma del presidente Clinton; antes de ese fatal 24 de febrero, la Casa Blanca tanteaba la posibilidad de un veto presidencial o, al menos, la aprobación de una ley que ladrara sin morder. La Habana y Miami estimularon un desenlace mutuamente beneficioso; David le imponía a Goliat su política. Me explico. Hacia fines de 1995, la administración Clinton intentaba moverse sobre el llamado Carril Dos de la ley Torricelli, es decir, la promoción de encuentros múltiples con la sociedad civil cubana. Ni al gobierno cubano ni al exilio intransigente le agradaba esa movida. La Cuba oficial había llegado al tope de las reformas que su sobrevivencia dictaba y rehuía un ambiente internacional que la obligara a ir más allá. El surgimiento de Concilio Cubano y el posible acuerdo de cooperación económica con la Unión Europea reclamaban apertura y flexibilidad cuando desde el verano de 1995 las rendijas ya se habían cerrado. La Helms-Burton no detuvo las tímidas reformas; más bien su aprobación sirvió

de justificación *ex post facto*. El exilio intransigente, por otra parte, tampoco veía con buenos ojos lo que consideraba la política blanda del Carril Dos. La posibilidad de diálogo entre La Habana y Washington siempre ha hecho sonar todas las alarmas, y así fue a mediados de los 90.

Los éxitos políticos de esta década, no obstante, son cortoplacistas. Ni un embargo fortalecido ni un gobierno cubano reconstituido sientan pautas de futuro. Al contrario. Los llamados a no cejar ni un ápice ante la Cuba de Castro, por un lado, y, por el otro, al levantamiento incondicional del embargo coinciden en mantener el *statu quo*. El embargo y las leyes que lo fortalecieron se basan sobre un absurdo: A Fidel Castro se le puede presionar a negociar el poder. Pedir el fin sin condiciones del embargo en la post-guerra fría es equivalente a pedir que se mantenga incólume: Estados Unidos sencillamente no va a reconocer al gobierno de La Habana mientras su presidente se apellide Castro. La Cuba oficial y el exilio intransigente son alérgicos al diálogo y a las negociaciones e inadvertidamente se confabulan para torpedear lo que cada vez es más evidente: Washington —tanto la administración como sectores del Partido Republicano— buscan trazar una política con miras al futuro. La Cuba oficial y del exilio intransigente sólo saben hacer el cuento de la buena pipa: Aturden, imponen, silencian. Sus éxitos recientes obstruyen el camino hacia una Cuba democrática y de quince provincias. Señalo dos razones.

La primera es referente a la Cuba oficial. Sólo un estado de derecho puede desembargarnos. La reconstitución de esta década ha servido los intereses del poder, pero no los de la convivencia nacional, en primer lugar, en la isla. Los espacios públicos en Cuba están viciados por lo que el propio régimen caracterizó de «doble moral» e «irreal afán de unanimidad»; pero su irrefrenada ansia por sobrevivir no le permite a la cúspide considerar la fórmula que saldaría estos escollos: la libre expresión ciudadana. La pancarta de «la nación y la emigración» no es sorprendente: Es la única hechura de convivencia isla-díaspóra que le sirve a un régimen que se nutre del bloqueo a la participación plena y libre de sus ciudadanos. ¿Cómo va a reconocerle a los cubanos en el exterior derechos que los cubanos en la isla no pueden ejercer?

La segunda se relaciona a la ley Helms-Burton. Aunque su extraterritorialidad (la expectativa de Washington de que el mundo acate una ley norteamericana) es el aspecto más condenado por la comunidad internacional, el más atroz para el futuro de Cuba es otro. La ley hace extensión retroactiva de los beneficios de la ciudadanía norteamericana a personas que eran ciudadanos cubanos en 1959. La Helms-Burton decreta una compensación a las reclamaciones de los cubanoamericanos, o la restitución de sus propiedades, como condición previa a una normalización. Las reclamaciones de las propiedades cubanas confiscadas en 1960 son, indudablemente, legítimas; lo que es penoso es que los perjudicados se acojan al manto protector de Washington cuando se trata de un asunto entre cubanos. Una Cuba democrática debe tener la oportunidad de saldar este espinoso tema con sus propios medios y a su manera, y los afectados por la revolución harían más por esa Cuba depositando su confianza en ella que abriendo registros miamenses de propiedades confiscadas.

La modernidad política implica una institucionalidad capaz de dirimir diferencias y una cultura de diálogo. Las diferencias y el diálogo, por supuesto, tienen que ser reales y son requisitos indispensables de la democracia. ¿De qué sirve respetar o escuchar a los que piensan como nosotros? De casi nada. Si fuéramos capaces de trazar estrategia y táctica en base a nuestras diferencias y en pos de un diálogo reconstitutivo, alcanzaríamos éxitos comparables a los del PRC de Martí y Estrada Palma a fines del siglo XIX.

Las palabras recientes de dos cantantes cubanos nos sugieren los pasos a medias, aunque sea retóricos, que nos ayudarían a que el cuento interminable no nos siga atosigando. El verano pasado, Pablo Milanés le dijo al diario madrileño *El País*: «Soy un abanderado de la revolución, no del gobierno. Me considero con derecho a amar la revolución y no amar a los hombres que la hicieron, aunque los respete mucho». Ante una rueda de prensa en Miami, Willy Chirino manifestó su oposición al sonado concierto de *Los Van Van* en la Arena de la ciudad el pasado 9 de octubre. Al mismo tiempo Chirino defendió el haber sostenido encuentros en Panamá, Cancún y Madrid con Juan Formell y los otros músicos de la orquesta: «Soy un cubano libre que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Los artistas cubanos no pueden ser mis enemigos». Milanés y Chirino establecen una cierta distancia de los polos: la de Pablo más osada pues vive en Cuba y a Willy lo protege la Carta de Derechos de la Constitución.

La sociedad civil cubana está dando crecientes y alentadoras muestras de pluralismo y civismo en la isla y en la diáspora. Pero con sociedad civil solamente no nos desatascamos. La política es imprescindible, pero sólo si es una moderna que conviva con las diferencias, negocie, dialogue, pacte y sepa cantar victorias parciales. La democracia es lo único no negociable, pero el camino hacia ella forzosamente pasa por las transacciones. ¿Por qué no apoyar la venta de alimentos y medicinas a Cuba ahora que la Helms-Burton ha codificado el embargo y ningún presidente lo puede levantar sin el consentimiento del Congreso? ¿Por qué no extenderle a los cubanos en la isla los mismos derechos empresariales que tienen los extranjeros? Si estas políticas —la primera propuesta a la FNCA y la segunda alzada por sectores de la Cuba oficial— se hubieran asumido a mediados de los 90, quizás ahora estuviéramos llegando al milenio menos polarizados.

A mediados de los cincuenta, el escritor y analista político Francisco Ichaño anotó lo siguiente: «Hace tiempo ya que vivimos bajo el régimen del grito pelado. Así no hay modo de entenderse. Mientras más griten las gargantas más callan las ideas. Es indispensable la buena fe mutua». La buena fe y las ideas nuevas ya en proceso en la sociedad civil —aquí y allá— no bastan para suplir nuestra ronquera. Es la política la única que puede saldar el déficit de entendimiento entre nosotros los cubanos y sentar la institucionalidad conducente a la reintegración. Sólo asumiendo —entre ambas orillas, dentro de la isla y en la diáspora— los riesgos intrínsecos a apartarnos de los polos dejaremos de hacernos el cuento de la buena pipa. Quizás a nosotros que no vivimos en Cuba nos toque un grado mayor de imaginación, voluntad y valentía: Somos, después de todo, libres y nos costaría menos, mucho menos, bajar la voz.